

Folio. I

SEÑORES. JUZGADO DE EJECUCION DE  
PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD DE REPARTO DE  
ACACIAS - META.

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA EN  
CONTRA DEL JUZGADO SEGUNDO  
DE EJECUCION DE PENAS Y  
MEDIDAS DE ACACIAS META Y  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE  
VILLAVISCENSO. META

por vulneración al debido proceso  
en NEGRARME EL BENEFICIO ADMINISTR.  
TATIVO DE 72 HORAS DE PERMISO.  
DENTRO DEL PROCESO NO: 05 001 60 00  
206 - 2014 93567 00. INCURRIERON EN

10 FEB 1951

1. The first of the series of experiments was carried out on 10 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the concentration of the solution on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

2. The second experiment was carried out on 11 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the temperature on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

3. The third experiment was carried out on 12 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the surface area of the reactants on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

4. The fourth experiment was carried out on 13 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the catalyst on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

5. The fifth experiment was carried out on 14 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the concentration of the solution on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

6. The sixth experiment was carried out on 15 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the temperature on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

7. The seventh experiment was carried out on 16 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the surface area of the reactants on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

8. The eighth experiment was carried out on 17 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the catalyst on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

9. The ninth experiment was carried out on 18 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the concentration of the solution on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.

10. The tenth experiment was carried out on 19 Feb 1951. The purpose of this experiment was to determine the effect of the temperature on the rate of reaction. The results of this experiment are shown in the table below.



Folio. 2.

(i) UN DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL INADMISIBLE EN RELACION CON LA EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y EL PRINCIPIO FUNDANTE DE LA DIGNIDAD HUMANA, AL CONSIDERAR QUE SE COMETIÓ UN DELITO DOLOSO DENTRO DE LOS 5 CINCO (5) AÑOS ANTERIORES. (ii) UN DEFECTO SUSTANTIVO POR EVIDENTE CONTRADICCIÓN ENTRE LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DE LOS PROCESOS:

05 001 60 00 206 2014 93567 00 J  
05 001 60 00000 2015 00496 00 J

ACCIONANTE: GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARAÑO  
C.C. NO: 98.670.899

RECURSO: EPMSC DE ACACIAS - META

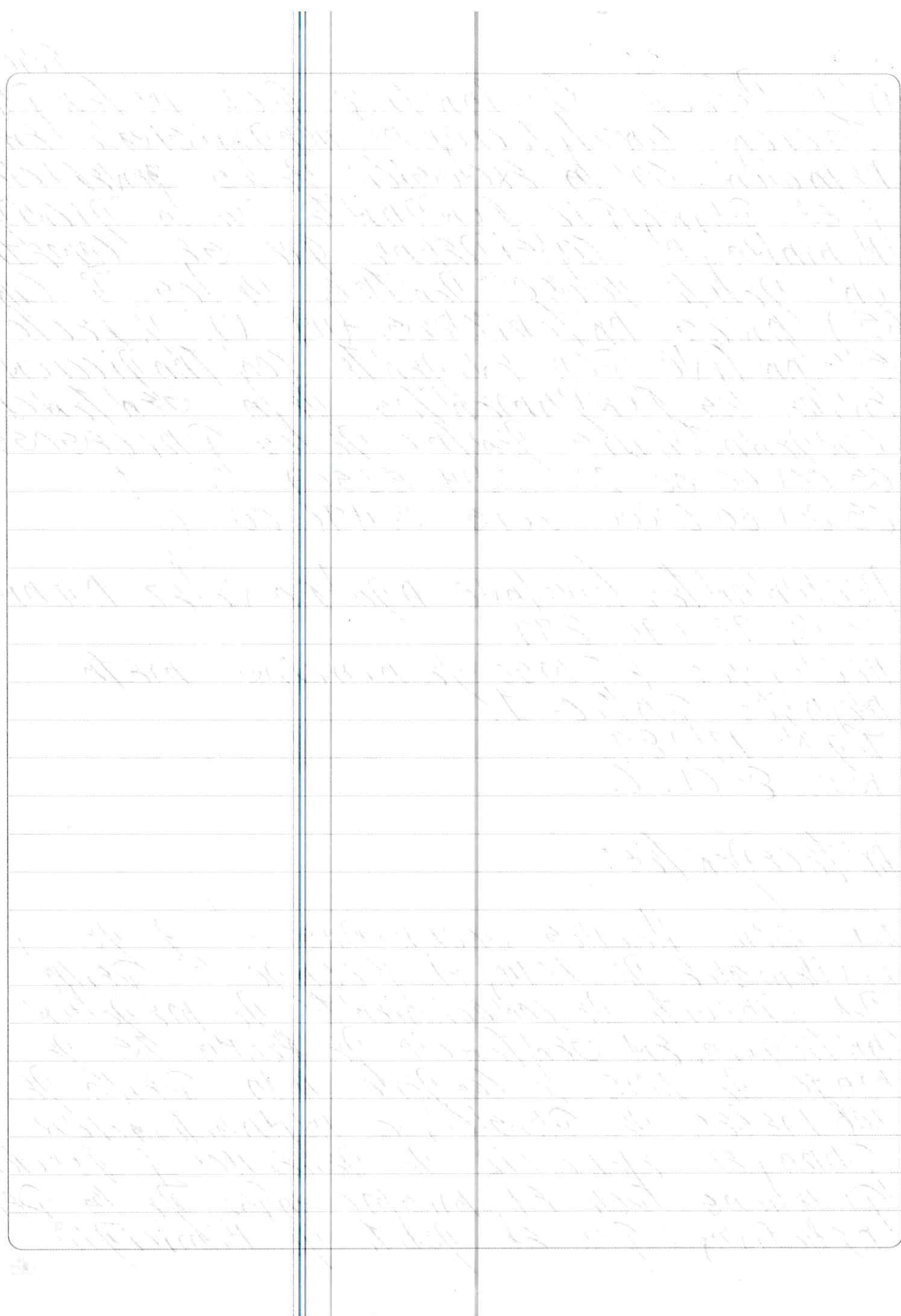
MOJADO: PATIO. 1.

DT NO 12/789

KU: 860106.

### ANTECEDENTES:

2.1 POR HECHOS OCURRIDOS EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014, EL JUZGADO 8º PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN ANTIOQUIA, EN SENTENCIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2015 LO CONDENÓ A LA PENA DE 206 MESES DE PRISIÓN, E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL MISMO TIPO DE LA PENA AFECTIVA; POR EL DELITO DE HOMICIDIO





Folio 3.

ABRAVADO EN CONCURSO HOMÓGENEO, EN CALIDAD DE CÓMPlice. SE LE APLICARON LAS SUBROGADAS PENALES.

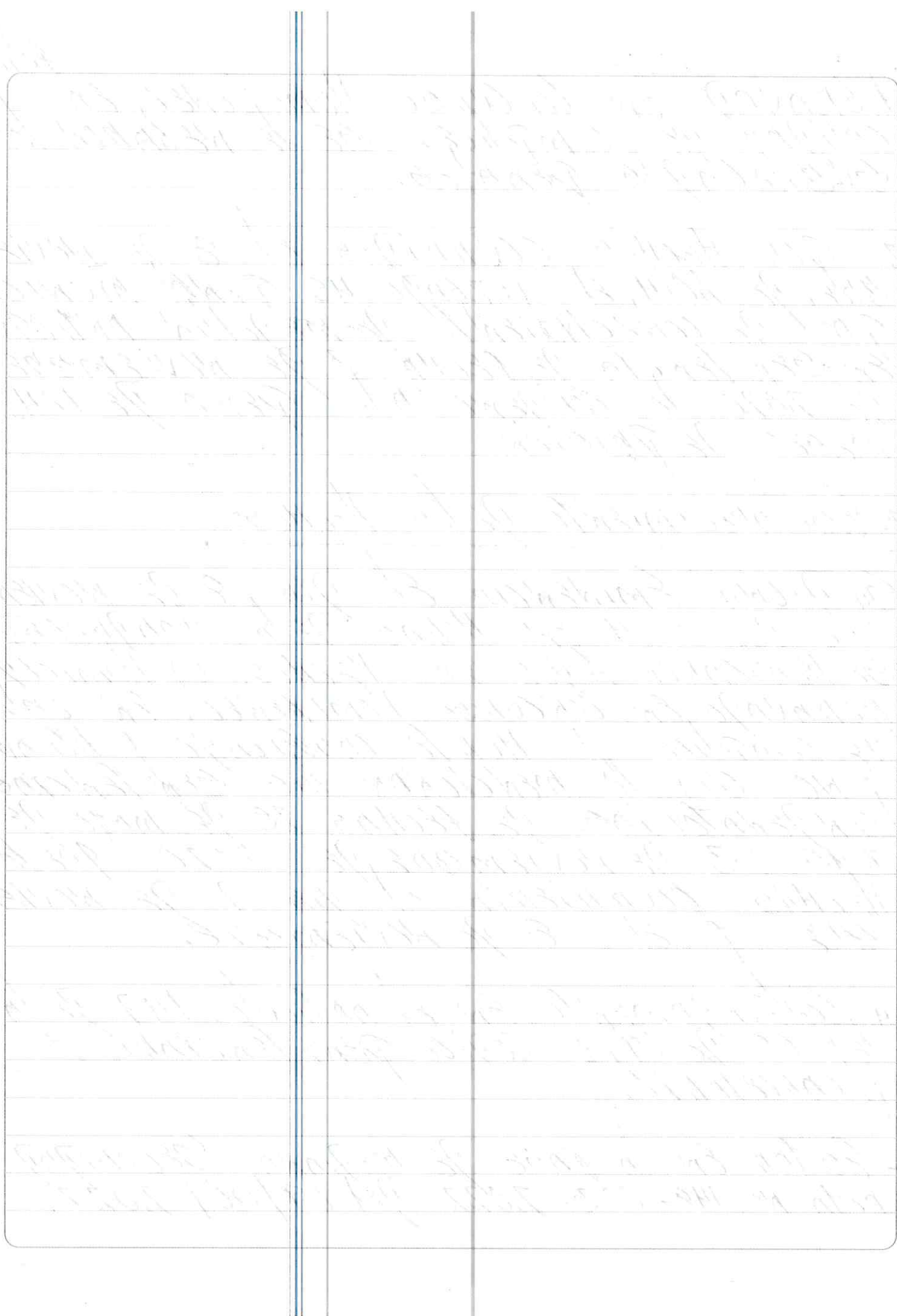
2.2. POR HECHOS OCURRIDOS EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014, EL JUZGADO 45 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ANTHROQUINIA, EN SENTENCIA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 LO CONDENO A LA PENAL DE 124 MESES DE PRISION.

### 2.3. Esclarecimiento de los Hechos:

En su 16na Evidencia el día 8 de noviembre de 2014 en horas de la mañana se realizaron todos los hechos, (i) homicidio agravado en concurso homogéneo, en calidad de cómplice y junto con el autor y agravado y no como lo mencionan las sentencias condenatorias. de fechas 25 de mayo de 2015 y 3 de noviembre de 2020. que los hechos ocurrieron el día 7 de noviembre y el 8 de noviembre.

2.4. FUNDAMENTO EN EL ARTICULO. 147 DE LA LEY 69 DE 1993 CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO.

1- ESTAR EN LA FASE DE MEDIANA SEGURIDAD  
• ACTA N° 140-023-2022 DEL 09/06/2022.





2.-, Hacer descuento una tercera parte de la pena impuesta, con excepción de aquellas personas que haya sido condenadas por delitos de conocimiento de juzgados penales del circuito especializados, a quienes existe un descuento del 70% de la pena impuesta.

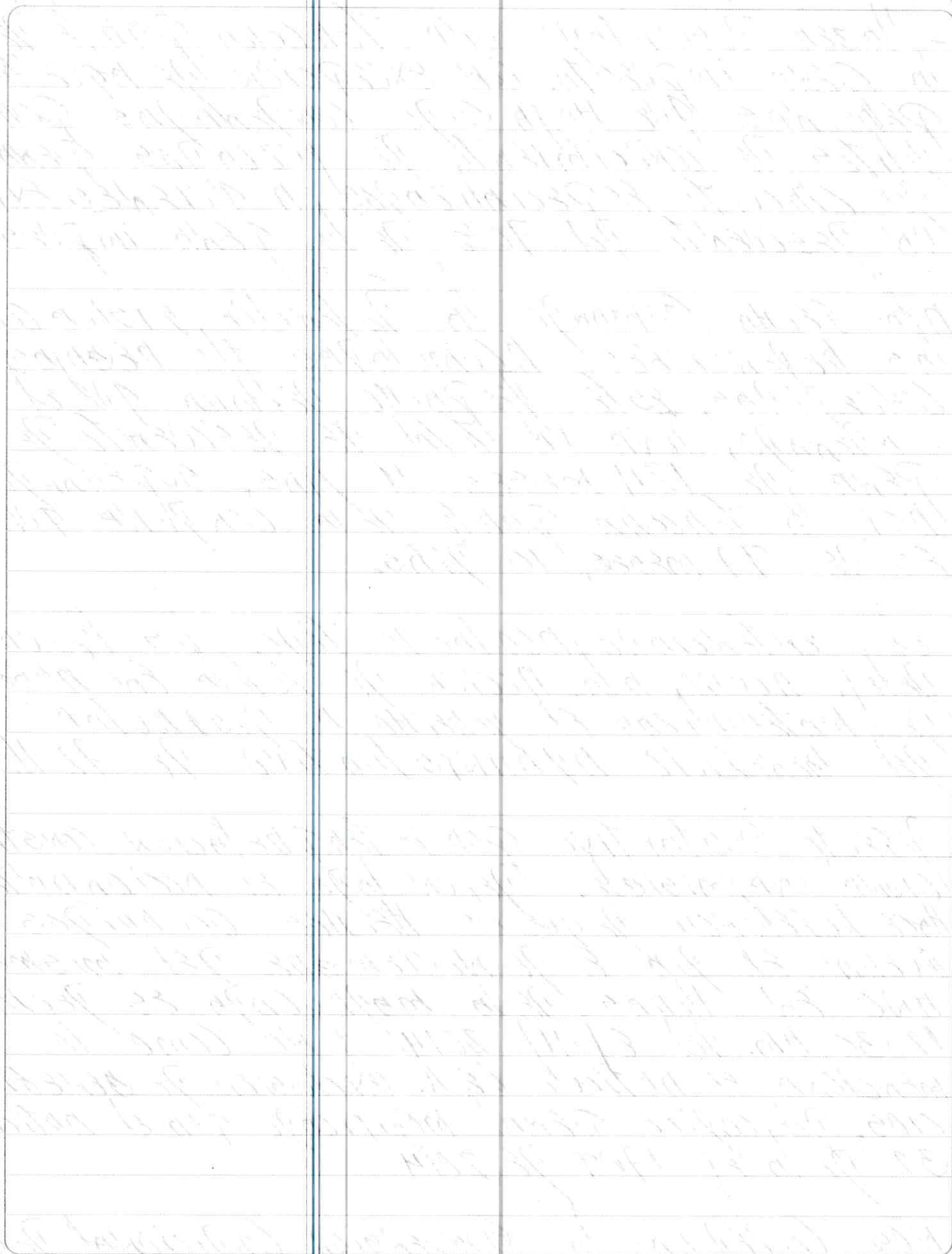
A la fecha sumando la detención física con las reclusiones acumuladas y/o rebajas concedidas, este despacho declara que el condenado, lleva un total de descuento de pena de 124 meses, 11 días, superando así la tercera parte de la condena que es de 97 meses, 10 días.

3. El Sentenciado, habiendo agotado todos los recursos de ley, acude a la acción de tutela en aras de materializar el derecho a disfrutar del beneficio administrativo de 72 horas

3.1. Defecto sustantivo por interpretación constitucional inadmisión. De un lado, el accionante hace referencia de que los hechos ocurridos fueron el día 8 de noviembre del mismo año en horas de la mañana es decir. 12:30 am. del 8/11/2014. y no como lo menciona el artículo 68 A. (exclusión de beneficios de capital penal) modificado por el artículo 32 de la ley 1709 de 2014.

Nose concede; la suspensión condicional de la





Folio 5.

De la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni hacen lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por ley. Siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.

Claramente se puede evidenciar que hay error en la interpretación de los hechos ocurridos. Que fueron el día 8 de noviembre de 2014. A las 12:30 AM. Es decir el mismo día - (NO EN DÍAS DIFERENTES)

3.2. Bajo el contexto anterior, la Corte ha señalado que, por el encarcelamiento, los derechos a la libertad física y a la libre locomoción se suspenden, y así puede ocurrir también con los derechos a participar en la conducción, ejercicio y control del poder político.

Otros derechos, como la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión, son restringidos en aras de asegurar el orden interno en los centros penales. Por su parte la vida, la intimidad personal, la



On the 1st of May 1861  
I was at the house of  
Mr. D. Smith at 10 o'clock  
and saw the following  
specimens of the  
fossils of the  
Silurian system.

(Specimens of the  
Silurian system of  
the house of Mr. D. Smith  
at 10 o'clock on the 1st of May 1861.)

One of the most  
interesting of the  
fossils of the  
Silurian system  
is the *Trilobites*.  
They are found  
in the Silurian  
system of the  
house of Mr. D. Smith  
at 10 o'clock on the 1st of May 1861.



Párr. 6.

la dignidad humana, la identidad, la libertad religiosa, la personalidad jurídica, la salud, el debido proceso y el derecho de defensa, se conservan incólumes, a pesar de la privación de la libertad a que son sometidos, sus titulares, siendo deber del Estado garantizarlos y preservar su efectividad.

33. Los hechos que originaron este proceso fueron sintetizados así en el escrito de acusación:

"En el apartamento 2002 de la Unidad residencial MASSAI ubicada en la Calle 6ª No. 18-97 de esta ciudad, hacia algo más de 10 años residían la pareja de esposos conformada por marco rallo, ciudadano italiano, y la colombiana maria clara Uribe Alzate, el primero conector de bolsa y la segunda empleada de una entidad privada. Para el día 07 de noviembre de 2014 y luego de que encontraban ya dentro del sitio de domicilio sucedió un hecho de sangre el cual solo se vino a noticiar en la mañana, del 08 del mismo mes y año. Sucede que las autoridades tuvieron conocimiento que en plena vía pública, por el sector de las palmas, cerca al edificio intercontinental, se encontraba el cadáver de una persona de sexo femenino, la cual se encontraba amarrada de pies y manos.

Page 1

1

Page 2

2



Si bien en el momento de la inspección del cadáver no se tenía conocimiento sobre la identificación, pues unas dos horas después de este hallazgo, es decir, a las 07:00 aproximadamente, se logra la ubicación de otro cadáver sobre la carretera, 24 con calle 17 Unidad Residencial Poblado Alto, quien fue identificado definitivamente por medicina legal y con la información obtenida, se logró establecer que se trataba de la pareja de esposos en comento.

Se sabe, de acuerdo a las interrogaciones realizadas por los funcionarios de la Sisin, que el apartamento donde residían las víctimas había sido saqueado, que del apartamento había sido saqueado, una de las cajas fuertes había sido abierta, desconociéndose que había en su interior, a más de ello los cuerpos presentaban signos de violencia y acorde con el informe de medicina legal ellos mueren por asfixia mecánica.

momentos después de este mismo hallazgo ocurre un hecho particular, de la central de radio se reporta que en la calle 30 con la 31, sector del barrio Nuevo, se había presentado un accidente, esto es, un vehículo se había chocado contra un inmueble y otro rodante y como consecuencia su conductor resultó lesionado. Al acudir



1. The first step in the process of the scientific method is to make an observation or ask a question.	2. The second step is to do background research.	3. The third step is to form a hypothesis.
4. The fourth step is to test the hypothesis by conducting an experiment.	5. The fifth step is to analyze the data and draw a conclusion.	6. The sixth step is to communicate the results of the experiment.
7. The seventh step is to repeat the experiment to verify the results.	8. The eighth step is to publish the results of the experiment.	9. The ninth step is to use the results of the experiment to make a prediction.
10. The tenth step is to use the results of the experiment to make a hypothesis.	11. The eleventh step is to use the results of the experiment to make a conclusion.	12. The twelfth step is to use the results of the experiment to make a prediction.

la policía y los mismos funcionarios de  
Ternero se encuentran que en efecto el  
carro VOLKS WAGEN, color negro de placa CYN  
712, había colisionado y como quien lo condu-  
cia había resultado lesionado hubo que  
remittirlo a un centro asistencial, pero  
antes de ello, el mismo lesionado GUSTAVO  
NÚÑEZ VEZ AHANCO, sin mayor razón que  
su propia decisión, advierte a las autorida-  
des, que en realidad ese carro lo había  
conducido SIN, dan mayores detalles sobre  
el accidente. Ante esta información las  
autoridades se dan a la tarea de averi-  
guar sobre el caso estableciéndose que  
este era propiedad de la dama VILGE  
ZARATE (SIC) quien había encontrado horas  
antes sin vida en vía pública, además,  
en su interior se encontraron con  
evidencias como una maleta (SIC) con  
sangre igual a la que encontraron con  
evidencias en el capó de la dama de ello  
la sangre que en la maleta del lesionado  
se detectó."

4) El ejercicio punitivo del Estado responde  
a varias finalidades, dentro de las cuales  
la reeducación del infractor prevalece,  
especialmente durante la etapa de ejecución  
de la pena. Como la superación personal  
del individuo. (ii) Así como la retribución  
justa en sus propias características las



[illegible]



folio 9

Cuales deben armonizarse de forma razonable. En esta medida, el estudio el estudio del juez de ejecución no se hace desde la argumentación ajena a los hechos sino desde el momento de su realización. En lo cual se realizan en un mismo día.

4.1 CON FUNDAMENTO EN LAS ANTERIORES REGLAS CUESTIONO QUE LAS DESPACHOS ACCIONADOS RESOLVIERON NEGATIVAMENTE LA SOLICITUD DEL BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE 72 HORAS HORAS DE PERMISO. RESOLVIERON NEGATIVAMENTE, TENIENDO EN CUENTA LOS DIAS DE LOS HECHOS EN DIFERENTES FECHAS, SIN QUE SE OBSERVABA QUE SE PRESENTA UNA MULTIPLICIDAD DE INFRACCIONES A UN TIPO PENAL.

4.2 ASI MISMO, SEÑALO QUE TAL DECISION CONDUCE A DEFECTO SUBSTANTIVO POR INTERPRETACION CONSTITUCION INADMISIBLE, AL AFIRMAR QUE EL BENEFICIO DE PERMISO DE 72 HORAS PUEDE NEGARSE SOLO POR EL EFECTO DE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS ENTRE EL 07 DE NOVIEMBRE Y EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014. SE DESCONOCE EL PRESENTE CONSTITUCIONAL QUE RESALTA LA PREVALENCIA DEL COMPETENTE RESOLUTIVO.

5. POR ETO ES IMPORTANTE RELATAR QUE SE TENIA EN CUENTA QUE ES UN DELITO INTENSO Y EN QUE CONSISTE UN DELITO

1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved.

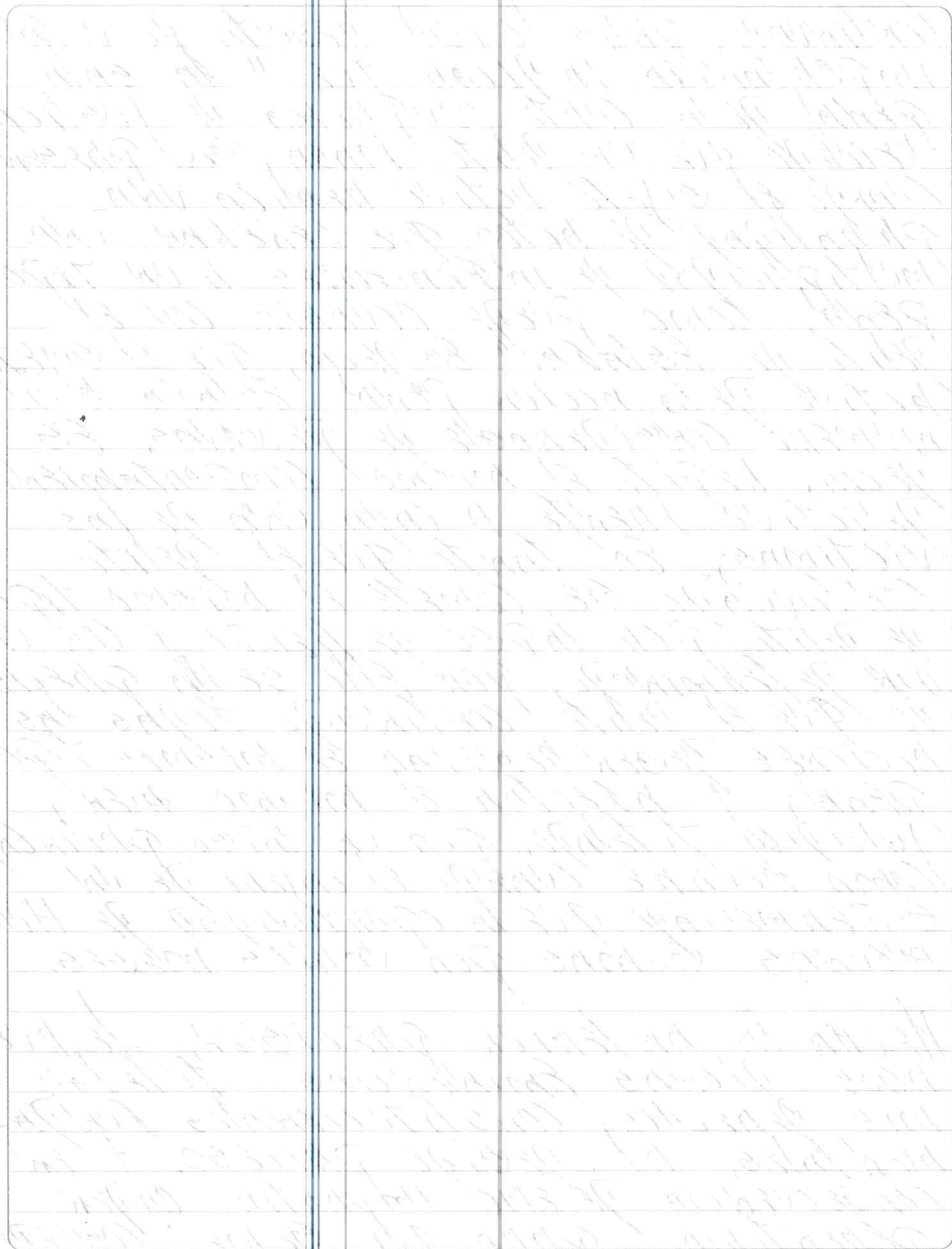
[illegible][illegible]

3-10-1994	10-10-1994
11-10-1994	12-10-1994
13-10-1994	14-10-1994
15-10-1994	16-10-1994
17-10-1994	18-10-1994
19-10-1994	20-10-1994
21-10-1994	22-10-1994
23-10-1994	24-10-1994
25-10-1994	26-10-1994
27-10-1994	28-10-1994
29-10-1994	30-10-1994
31-10-1994	31-10-1994



Continuando, para lo cual resulta de vital importancia indicar que "la sala penal de la corte suprema de justicia resolvió que un delito masa, se presenta cuando el sujeto activo realiza una pluralidad de actos que generan una multiplicidad de infracciones a un tipo penal, como ocurre ocurriendo con el delito de estafa." Es decir, que el sujeto activo de la acción penal estafa a un numero considerable de personas, es decir, repite el mismo comportamiento delictivo frente a cada una de las victimas; en tanto que el delito continuado se comete el mismo tipo de delito por lapso de tiempo y con un fin determinado, por ello se ha perfeccionado que el delito continuado todas las acciones deben realizar el mismo tipo penal, y afectan el mismo bien jurídico tutelado. Por un lapso prolongado como ocurre cuando el cajero de un supermercado que la oportunidad de hurtar algunas sumas por varios meses.

Hecha la anterior precision, se debe a las normas empujadas tuteladas mas dehechas, constitucionales fundamentalmente, al debido proceso. y en consecuencia de ello impartir orden perentoria para que se me conceda





Folio 11

El permiso de 72 horas al cual tengo pleno derecho. Toda vez que las hechas tuvieron origen el mismo día.

2. PRUEBAS:

1. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN FECHA 2 DE AGOSTO DE 2021. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
2. APROBACION DE 72 HORAS DE PERMISO EN LA FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.
3. REVOLATORIA DEL PERMISO DE 72 HORAS DEL 7 DE FEBRERO DE 2020.
4. WIEBAN PERMISO DE 72 HORAS PERMISO FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
5. TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO. CONFIRMA. JUZGAMIENTO

Bajo la gravedad del juzgamiento MANIFI-  
ESTO QUE NO ME FORMULARO ACCION DE  
TUTELA POR LAS MISMAS HECHAS Y  
DEHECHOS RECLAMADOS.

AGRADECIENDO LA ATENCION GRACIAS  
RESPECTUAMENTE

11/11/11

1. The first part of the paper is a review of the literature on the topic of the effects of the environment on human health. This is followed by a discussion of the methods used in the study.

2. The second part of the paper is a description of the study design and the data collection process. This includes a discussion of the sample size, the selection criteria, and the methods used to collect the data.

3. The third part of the paper is a presentation of the results of the study. This includes a discussion of the descriptive statistics, the results of the regression analysis, and the findings of the mediation analysis.

4. The fourth part of the paper is a discussion of the implications of the findings for public health practice and policy. This includes a discussion of the strengths and limitations of the study and suggestions for future research.

5. The fifth part of the paper is a conclusion that summarizes the main findings of the study and the implications for public health practice and policy. This includes a discussion of the strengths and limitations of the study and suggestions for future research.

6. The sixth part of the paper is a list of references that includes all of the sources cited in the paper. This includes a discussion of the strengths and limitations of the study and suggestions for future research.

7. The seventh part of the paper is an appendix that contains additional information that is relevant to the study. This includes a discussion of the strengths and limitations of the study and suggestions for future research.



Gustavo Adolfo Vélez Arango  
C.C. No: 98670899



T. 7: 12789

Reclamo: EPMSC y E. A. C. - META.

Alojamiento: P. A. C. - I.

PP8758P: 2000-01-01

PP8758P

PP8758P: 2000-01-01





**Distrito Judicial de Medellín**  
**ACTA DE AUDIENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA**

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**  
**SALA DE DECISIÓN PENAL**

FECHA DE INICIACIÓN	02	08	2021	FECHA FINALIZACIÓN	02	08	2021
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

SALA DE DECISIÓN PENAL N°			DISTRITO JUDICIAL	MEDELLÍN	
NOMBRE DEL MAGISTRADO	RICARDO		DE LA PAVA	MARULANDA	
	NOMBRES		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
SALA N°	VIRTUAL	INICIACIÓN	10:02	FINALIZACIÓN	10:10

1. CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)															
0	5	0	0	1	6	0	0	0	0	0	2	0	1	5	0
Dpto. (DANE)	Municipio (DANE)		Entidad	Unidad Receptora		Año		Consecutivo							
2. NÚMERO INTERNO															
Año		Consecutivo													

3. ACUSADO (S), TIPO DE AUDIENCIA											
CÉDULA N°	NOMBRES Y APELLIDOS				SEXO		DETENIDO		ASISTIÓ		
98.670.899	GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO (Acacias – Meta)				F	M	SI	NO	SI	NO	
						X	X		X		
TIPO DE AUDIENCIA			COD.	DECISIÓN							
LECTURA APELACIÓN DE SENTENCIA				CONFIRMA							
TOTAL: Imputados o acusados					1	TOTAL FEMENINO		0	TOTAL MASCULINO		1

4. DELITO (S)									
DELITO (S)								LUGAR HECHOS	
Hurto calificado agravado								Medellín	
CALIDAD PARTICIPANTE		NOMBRES Y APELLIDOS						ASISTIÓ	
FISCAL 31	Local	HERNÁN ALBERTO RUIZ CEBALLOS						SI	
	Seccional								
	Especializado								
		X							
DEFENSOR PÚBLICO		JAIME AYALA RAMIREZ						NO	
APODERADO DE VÍCTIMAS		JULIAN ARCE ROGER						NO	
PROCURADORA 125 JUDICIAL II		LUIS MANUEL GUARIN MANRIQUE						SI	







Distrito Judicial de Medellín



6. OBSERVACIONES

Se procede a instalar audiencia de manera virtual de lectura de decisión de segunda instancia por la plataforma teams, acatando las directrices impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión del estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia generada por el virus Covid-19.

Presente en la sala virtual el magistrado Ponente, Dr. Ricardo de la Pava Marulanda, se verifica la presencia de partes e intervinientes en la forma antes referida, advirtiendo que el señor defensor expresó que no se conectaría y agregó que ya tiene la providencia, por su parte el señor Fiscal, aunque no hizo su presentación, se logró conectar cuando inició la lectura de la sentencia desde la parte considerativa de la decisión adoptada.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

**FALLA**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de naturaleza y origen conocidos, en cuanto es materia de apelación.

**SEGUNDO:** Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación en los términos del artículo 183 de la Ley 906 de 2004.

**RICARDO DE LA PAVA MARULANDA**  
Magistrado Ponente







**DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**  
**SALA PENAL DE DECISIÓN**

Medellín, lunes, dos de agosto de dos mil veintiuno

Aprobado mediante acta número 0069 del veintiséis de julio de  
dos mil veintiuno

**Magistrado Ponente**  
**Ricardo De La Pava Marulanda**

Por apelación interpuesta y sustentada por el señor defensor, conoce esta Corporación en segunda instancia el fallo proferido el 03 de noviembre de 2020 por la Juez Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín, mediante el cual condenó al señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO a la pena principal de ciento veinticuatro (124) meses de prisión, así como a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, por hallarlo penalmente responsable del delito de HURTO CALIFICADO AGRAVADO.





## 1. ANTECEDENTES

Los hechos que originaron este proceso fueron sintetizados así en el escrito de acusación:

*"En el apartamento 2002 de la unidad residencial MASSAI ubicada en la calle 6ª Nro. 18-97 de esta ciudad, hacía algo más de dos años residían la pareja de esposos conformada por MARCO RALLO, ciudadano italiano, y la colombiana MARÍA CLARA URIBE ALZATE, el primero corredor de bolsa y la segunda empleada de una entidad privada. Para el día 07 de noviembre de 2014 y luego de que se encontraban ya dentro de su sitio de domicilio sucedió un hecho de sangre el cual solo se vino a noticiar en la mañana del 08 del mismo mes y año. Sucede que las autoridades tuvieron conocimiento que en plena vía pública, por el sector de las palmas, cerca al edificio Intercontinental, se encontraba el cadáver de una persona de sexo femenino, la cual se encontraba amordazada de pies y manos. Si bien en el momento de la inspección a cadáver no se tenía conocimiento sobre la identidad de la occisa, posterior a ellos se logró su identificación, pues unas dos horas después de este hallazgo, es decir, a las 07:00 aproximadamente, se logra la ubicación de otro cadáver sobre la carrera 24 con calle 17 Unidad Residencial Poblado Alto, quien fue identificado debidamente por medicina legal y con la información obtenida se logró establecer que se trataba de la pareja de esposos en comento.*

*Se sabe, de acuerdo a las indagaciones realizadas por los funcionarios de la Sijin, que el apartamento donde residían las víctimas había sido saqueado, que una de las dos cajas fuertes había sido abierta, desconociéndose qué había en su interior, a mas de ello los cuerpos presentaban signos de violencia y acorde con el informe de medicina legal ellos mueren por ANOXIA MECÁNICA.*





*Momentos después de este macabro hallazgo sucede un hecho particular, de la central de radio se reporta que en la calle 30 con la 31, sector del barrio LORETO, se había presentado un accidente, esto es, un vehículo se había chocado contra un inmueble y otro rodante y como consecuencia su conductor resultó lesionado. Al acudir la policía y los mismos funcionarios de tránsito se encontraron que en efecto el carro Volkswagen, color negro de placa CYN 712, había colisionado y como quien lo conducía había resultado lesionado hubo que remitirlo a un centro asistencial, pero antes de ello, el mismo lesionado GUSTAVO ADOLFO VELEZ ARANGO, sin mayor razón que su propia decisión, advierte a las autoridades que en realidad ese carro lo había hurtado sin dar mayores detalles sobre el particular. Ante esta información los uniformados se dan a la tarea de averiguar sobre el rodante estableciéndose que éste era propiedad de la dama URIBE ZARATE (sic) quien se había encontrado horas antes sin vida en vía pública, además, en su interior se encontraron con evidencias como una medida (sic) con sangre igual a la que encontraron en el cadáver de la dama, cinta adhesiva utilizada para amordazar las víctimas, a más de ello la sangre que en la maleta del rodante se detectó."*

En diligencia preliminar realizada el 12 de noviembre de 2014 ante la Juez Veintidós Penal Municipal con funciones de control de garantías de Medellín, luego de declararse la legalidad del procedimiento de captura, el Fiscal 202 Seccional de este municipio le formuló imputación al señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO por la autoría del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, cargos que no aceptó el imputado. Finalmente, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.





El 24 de diciembre de 2014 se radicó escrito de acusación en el que se adicionó que el homicidio agravado es en concurso homogéneo (2 conductas), y la formulación oral se llevó a cabo el 25 de febrero de 2015 en el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín. El 25 de marzo siguiente se instaló la audiencia preparatoria, momento procesal en el que las partes indicaron que habían llegado a un preacuerdo, pero solo frente al concurso homogéneo de homicidio agravado, negociación que fue aprobada por la juzgadora y como consecuencia de lo anterior pasó a decretar la ruptura de la unidad procesal para que el conocimiento del punible de hurto calificado agravado fuera asumido por el funcionario judicial competente.

La actuación por el delito atentatorio contra el patrimonio económico le fue repartida el 02 de diciembre de 2019 al Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín, y se convocó a las partes para el 25 de agosto de 2020 a efectos de realizarse la audiencia preparatoria, pero al inicio de la misma el delegado de la Fiscalía manifestó su deseo de que se variara la finalidad de la diligencia por cuanto pasaría a exponer los términos del acuerdo al que había llegado con el procesado, debidamente asesorado por su defensor, solicitud que fue avalada por la juez de conocimiento.

En este sentido el funcionario informó que el señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO aceptaba el cargo de hurto calificado y agravado que le fue endilgado y en contraprestación se le degradaba su participación de autor a cómplice, de conformidad con el inciso tercero del artículo 30 del código penal, dejándose al criterio de la judicatura la tasación de la pena. Aclaró además el



delegado Fiscal que en este evento el requisito consagrado en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 se encuentra satisfecho por cuanto el vehículo automotor objeto del hurto se recuperó y se devolvió a los herederos de las víctimas.

La anterior convención fue aprobada por la falladora luego de verificar que el procesado actuó de manera libre, consiente y voluntaria. Acto seguido se corrió el traslado a las partes del que trata el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, y el 03 de noviembre de 2020 se dio lectura a la sentencia, decisión que es objeto de impugnación por parte del señor defensor en punto del trabajo dosimétrico de la pena realizado por la a quo.

## 2. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

En punto de la controversia, la sentenciadora de primera instancia dosificó la sanción así: adujo que el hurto calificado agravado definido en los artículos 239, 240, inciso 2º, y 241, numeral 10, del código penal, tiene establecida una pena de 144 a 336 meses de prisión, y que como el delegado de la Fiscalía de manera consensuada le reconoció al señor VÉLEZ ARANGO como único beneficio la degradación de la conducta de autor a cómplice, los límites punitivos previamente descritos se disminuyen de acuerdo con lo establecido al parágrafo segundo del artículo 30 del código penal, esto es, de una sexta parte a la mitad, quedando entonces la sanción entre 72 y 280 meses de prisión luego de aplicar el procedimiento descrito en el numeral quinto del artículo 60 ibídem.



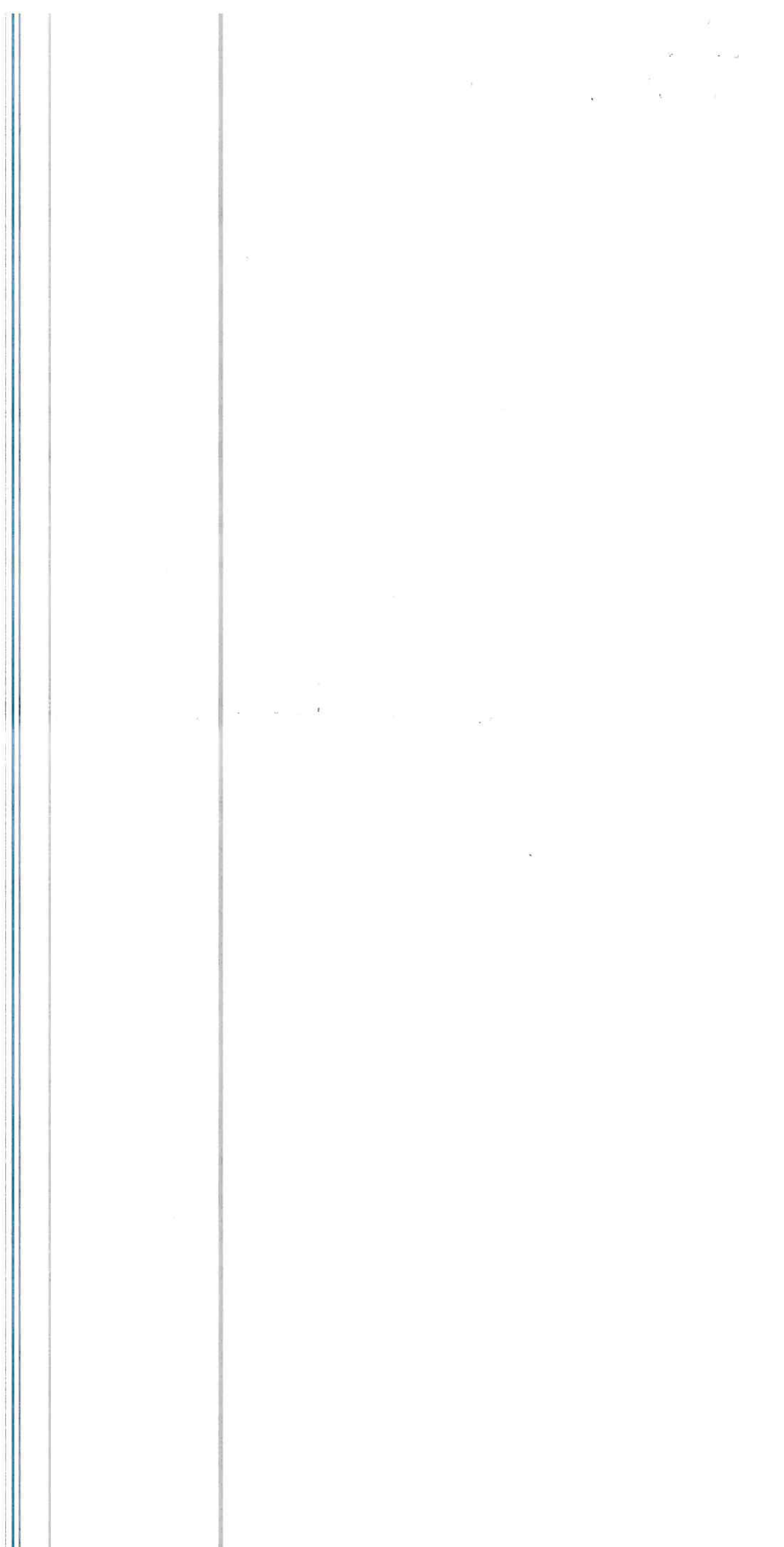


Posteriormente, la a quo estableció el ámbito de movilidad y ante la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad se ubicó en el primer cuarto delimitado entre 72 y 124 meses, y dentro de este fijó la sanción en el extremo superior (124 meses) argumentando que con ello atiende el pedimento del apoderado de la víctima en el trámite de la audiencia de que trata el artículo 447 del código de procedimiento penal, pues tal y como lo anotó dicho interviniente, estima que la gravedad de la conducta es evidente ya que de acuerdo con los elementos materiales probatorios acopiados por el ente acusador, la violencia desplegada sobre las víctimas se tornó desmedida.

### 3. LOS MOTIVOS DEL DISENSO.

El señor defensor cuestiona la decisión de primera instancia únicamente en lo tocante con el monto de la sanción privativa de la libertad impuesta al acusado, pues considera que el guarismo final resulta supremamente alto.

Solicita que se tenga en cuenta que el señor VÉLEZ ARANGO fue condenado a una pena superior a diecisiete (17) años como consecuencia del preacuerdo celebrado anteriormente por el delito de homicidio agravado, decretándose entonces la ruptura de la unidad procesal, según estima, ante la ausencia del pago de indemnización de perjuicios, aclarando que representó judicialmente al procesado en las audiencias preliminares y que ahora le fue repartido de nuevo el caso referente al punible de hurto calificado agravado que aquí se adelanta.





Y sobre los motivos específicos de su inconformidad, sostuvo que la juez de primera instancia al dosificar la pena no tuvo en cuenta que podía ubicarse en la sexta parte y no en la mitad para lograr un mayor descuento punitivo, además, al dividir los cuartos se ubicó en el mínimo partiendo de la mitad de la rebaja por el preacuerdo, pero en el límite superior del mismo, y aunque destaca que es obvio que la funcionaria podía proceder de esa manera, deprecia que se analice que su poderdante está purgando una larga condena por la otra conducta delictiva concursante y por eso estima que sumarle más de diez (10) años por el hurto deviene en una pena supremamente alta pudiendo ubicarse la sanción en el mínimo del primer cuarto, esto es, en 72 meses de prisión, ello en virtud de los criterios moduladores de la actividad procesal y atendiendo a una posición más humanista y *pro homine* para una persona que si bien ha cometido graves errores, los está pagando con creces.

#### **4. CONSIDERACIONES**

Es competente esta Corporación para examinar, por vía de apelación, el fallo proferido por la Juez Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín, de conformidad con el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906 de 2004. En razón de la limitación temática de la segunda instancia sólo examinaremos el único punto del disenso referido a la dosificación de la pena.

Para iniciar, tenemos que tal y como fue presentado, el preacuerdo celebrado entre las partes contiene la



degradación de la participación de coautor a cómplice, reconociéndole al procesado el descuento punitivo previsto en el artículo 30 de la Ley 599 de 2000 pero sin pactar en concreto la pena<sup>1</sup>, convención que fue aprobada por la sentenciadora de primera instancia y aplicada en el fallo condenatorio en el que realizó la respectiva tasación de la sanción privativa de la libertad dejada a su criterio.

Al respecto, tenemos que el artículo 61 del código penal establece un derrotero que regula los criterios del sentenciador para la imposición de la pena, comenzando por la necesidad de atender a los concretos límites que contemple el precepto típico objeto de imputación, con la totalidad de las circunstancias que inciden directamente en los tipos básicos o especiales y las agravantes y atenuantes específicas concurrentes.

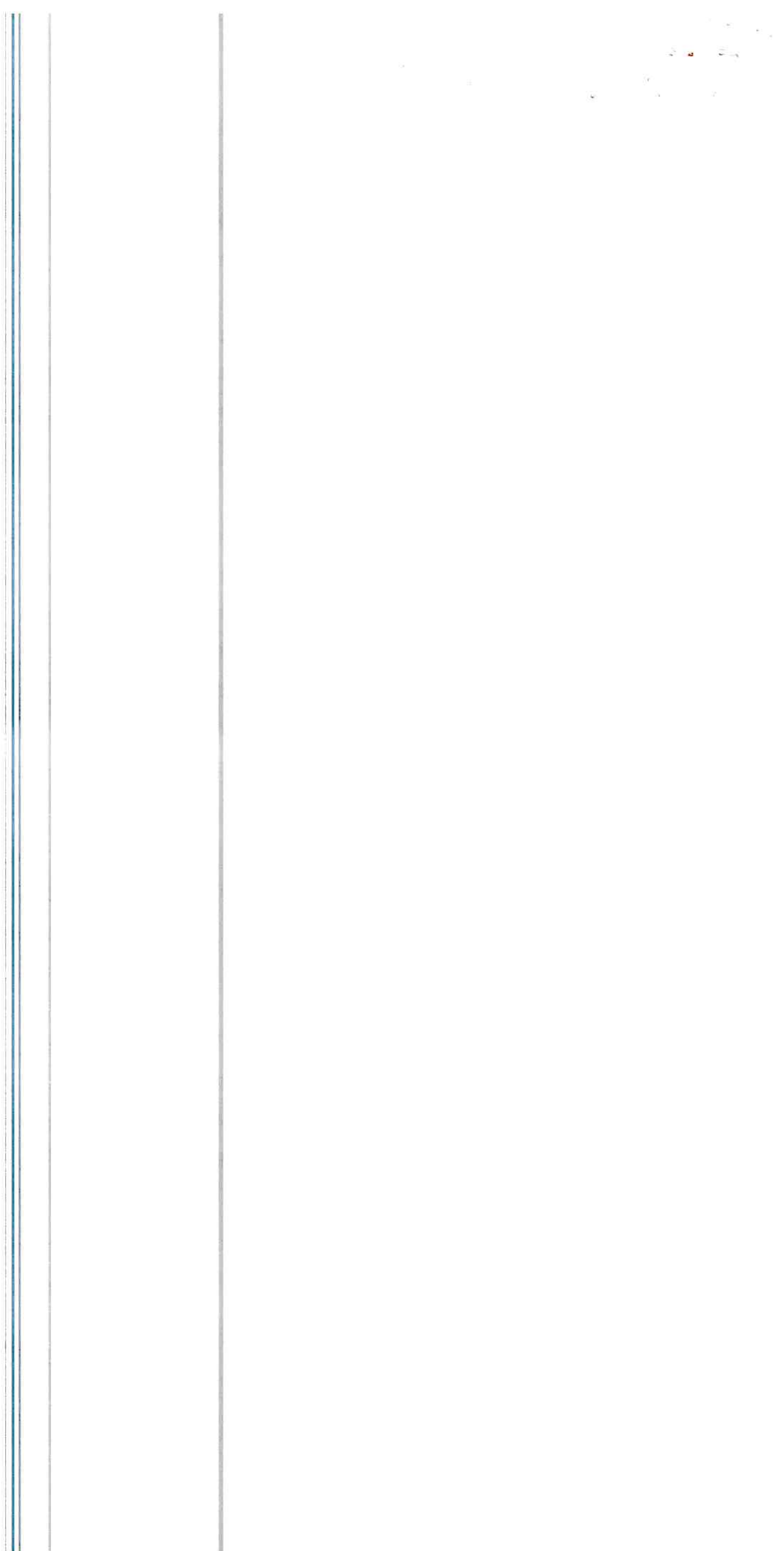
Luego de constatar el marco de la pena y la selección del cuarto de movilidad conforme a las circunstancias de mayor y menor punibilidad concurrentes (incluidas en la imputación y en este caso en el preacuerdo), adquieren fundamental importancia los elementos atinentes a la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las agravantes o atenuantes, la intensidad del dolo, culpa o preterintención que concurren y la necesidad de la pena, así como la función que ésta ha de cumplir en el caso concreto.

La deducción de estos elementos es auspiciada en la ley a partir de la concesión al fallador de un criterio discrecional

---

<sup>1</sup> Acta de audiencia preparatoria que varió a preacuerdo, llevada a cabo el 25 de agosto de 2020 en el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín. (Páginas 169 a 172 del archivo digital "01CarpetaFisicaEscaneada").





y razonable con base en el cual determina la pena aplicable. En la dialéctica de esa operación, el juez fija unos criterios que lo llevan a ubicarse en el extremo inferior del cuarto de movilidad seleccionado o avanzar de ese mínimo una proporción o hasta el límite superior, como sucedió en este caso, conforme a las razones que debe explicar y que constituyen el fundamento del incremento a través de una privativa valoración judicial, de tal manera que la queja que formula la censura constituye su propia visión del asunto y se torna en una simple disparidad de criterios con la sentenciadora, que no son de recibo para la Sala en tanto se observa el trabajo dosimétrico elaborado por la juez de primer nivel como racional y proporcional, que se traduce en un ajustado equilibrio en la aplicación de la pena.

En el tema del procedimiento agotado por la a quo para aplicar la rebaja de pena establecida en el parágrafo 2º del artículo 30 del código penal por la degradación de la participación del procesado de autor a cómplice, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que la juez de primera instancia no tuvo en cuenta que podía ubicarse en la sexta parte y no en la mitad para lograr un mayor descuento punitivo, pues olvida el censor que para efectos de aplicar el descuento punitivo de que trata la regulación penal precitada se debe acudir al numeral 5º del artículo 60 ibídem:

*"5. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica."*

Y fue siguiendo esa norma sustantiva penal que la a quo procedió a realizar la dosificación punitiva. Veamos:





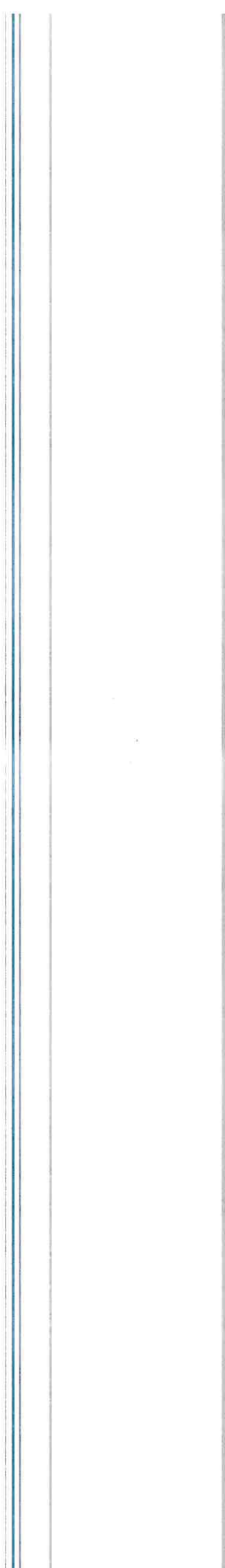
*"Teniendo en cuenta que la conducta lleva inmersa una circunstancia de AGRAVACION PUNITIVA, aquella prevista en el numeral 10° del artículo 241 del Código Penal, modificado por el artículo 51 de la ley 1142 de 2007, dicha pena se aumentara de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes, por lo que tales extremos punitivos se incrementan de conformidad a lo normado en el canon 60, numeral 4° Ibídem, quedando de doce (12) a veintiocho (28) años de prisión (144 a 336 meses).*

*Ahora como quiera que el delegado fiscal en el preacuerdo le reconoció como único beneficio la degradación de la conducta de autor a cómplice, los límites punitivos previamente descritos se disminuyen conforme al artículo 30 del C.P. esto es, de una sexta parte a la mitad, quedando finalmente de setenta y dos (72) meses a doscientos ochenta (280) meses de prisión"<sup>2</sup>*

Es así como se observa que el procedimiento agotado por la primera instancia en punto de la dosificación de la pena estuvo ajustado a la ley, hecho con el cual no se desconoce la convención suscrita por las partes.

Ahora, sobre la pena en concreto impuesta al señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO y que se fijó en el máximo del primer cuarto de movilidad luego de aplicarse el descuento en virtud del reconocimiento de su participación en calidad de cómplice, tampoco resulta de recibo el argumento expuesto por el censor en punto de que se tenga en cuenta que su poderdante está purgando una larga condena por la otra conducta delictiva concursante -el homicidio agravado en concurso homogéneo- y por eso sumarle más de diez (10) años por el hurto deviene en una pena supremamente

<sup>2</sup> Acápite "DOSIMETRÍA PENAL" de la sentencia de primera instancia. Folio 7.



alta pudiendo haberse ubicado la sanción en el mínimo del primer cuarto, esto es, en 72 meses de prisión.

En este punto debe puntualizarse que la Juez Cuarenta y Cinco Penal Municipal de esta ciudad está juzgando solo el punible que fue puesto en su conocimiento, esto es, el hurto calificado agravado, y al respecto consideró que la gravedad de dicha conducta es relevante atendiendo a que la violencia desplegada sobre las víctimas para despojarlas de sus pertenencias se tornó desmedida, aspecto que permite fundadamente avanzar del extremo inferior del cuarto de movilidad seleccionado y sin que deba incidir para dicha valoración la otra sanción penal que recayó sobre el procesado como consecuencia de la aceptación de cargos por el concurso homogéneo de homicidio agravado, pues, se reitera, en esta actuación la falladora está evaluando, de manera independiente y exclusiva, las circunstancias modales que rodearon el injusto atentatorio contra el patrimonio económico y concluyó que frente al mismo se presentó una gravedad superior y desproporcionada.

Así las cosas, esta Colegiatura juzga razonable la tasación de la pena realizada por la primera instancia, observándose además que los criterios moduladores acogidos por la primera instancia de ninguna manera atentan garantías fundamentales del procesado o transgredan el principio pro homine, pues en este evento la norma aplicada es la correspondiente al delito juzgado.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,





## FALLA

**PRIMERO:** **CONFIRMAR** la sentencia de naturaleza y origen conocidos, en cuanto es materia de apelación.

**SEGUNDO:** Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación en los términos del artículo 183 de la Ley 906 de 2004.

## NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



**RICARDO DE LA PAVA MARULANDA**  
Magistrado



**RAFAEL MARÍA DELGADO ORTÍZ**  
Magistrado

*(Ausente con justificación)*  
**JOHN JAIRO GÓMEZ JIMÉNEZ**  
Magistrado

En lo cual se constató los Homocedricos el día 7 de nov. pero me  
capturaron el día 8 de noviembre al otro día.

ojo fecha 4 se hizo noturno procesal





Siete de noviembre de dos mil diecinueve

CUI: 05 001 60 00 206 2014 53567 00  
Número Interno: 2016 - 00308  
Sentenciado: GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO  
Delito: Homicidio agravado en concurso homogéneo  
Procedimiento: Ley 906 de 2004  
Autoridad: Circuito  
Actuación: De parte  
Interlocutorio No: 2382

#### I. ASUNTO

Se examina la documentación allegada por el Establecimiento que lo custodia para efectos de REDENCIÓN DE PENA, a favor del penado GUSTAVO ADOLFO VELEZ ARANGO, recluso en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad.

Así mismo resolverá sobre petición de aprobación de permiso de 72 horas.

#### II. ANTECEDENTES

2.1 Por hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2014, el Juzgado 8° Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín Antioquia, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2015 lo condenó a la pena de 206 meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena aflictiva, por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo, en calidad de cómplice. Se le negaron los subrogados penales.

2.2. En razón de este proceso ha estado privado de la libertad desde 12 de noviembre de 2014, esto es, 59 meses 25 días.

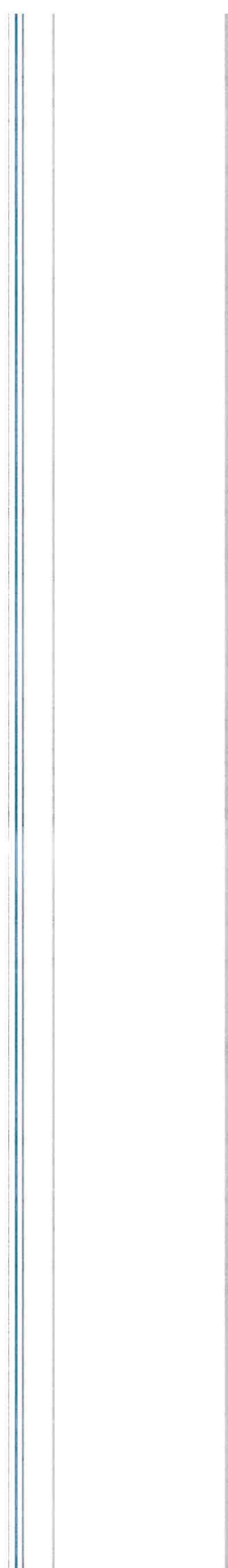
2.3. Como redención de pena se ha reconocido 11 meses y 12.5 días.

#### III. CONSIDERACIONES

##### A) PROBLEMA JURIDICO:

Durante el desarrollo de esta decisión judicial será resuelto los siguientes interrogantes: a) ¿Cumple el penado los requisitos del artículo 101 de la ley 65 de 1993, para reconocer a su favor redención de pena por la actividad realizada? b) ¿debe este despacho dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 68A del Código Penal y del decreto 232 de 1998, ya que la pena supera los 10 años de prisión? y c) ¿Debe aprobarse el permiso de 72 horas solicitado por el condenado?

##### B) SOLUCIÓN DEL CASO



Dentro del expediente se presentan los siguientes certificados de cómputos:

CERTIFICADO	ACTIVIDAD	CALIFICACION	PERIODO	HORAS
17348999	ESTUDIO	SOBRESALIENTE	01/02/2019- 31/03/2019	240
17448690	ESTUDIO	SOBRESALIENTE	01/04/2019- 30/06/2019	360

Las 600 horas de estudio satisfacen los requisitos previstos por el artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario, por lo que le representan 1 meses 20 días. La contabilización de las redenciones de penas va de la siguiente manera:

TIEMPO	MESES	DIAS
Redención acumulada	11	12.50
Redención concedido hoy	01	20.00
Total	13	02.50

88  
Con  
Redención  
mayo 2020

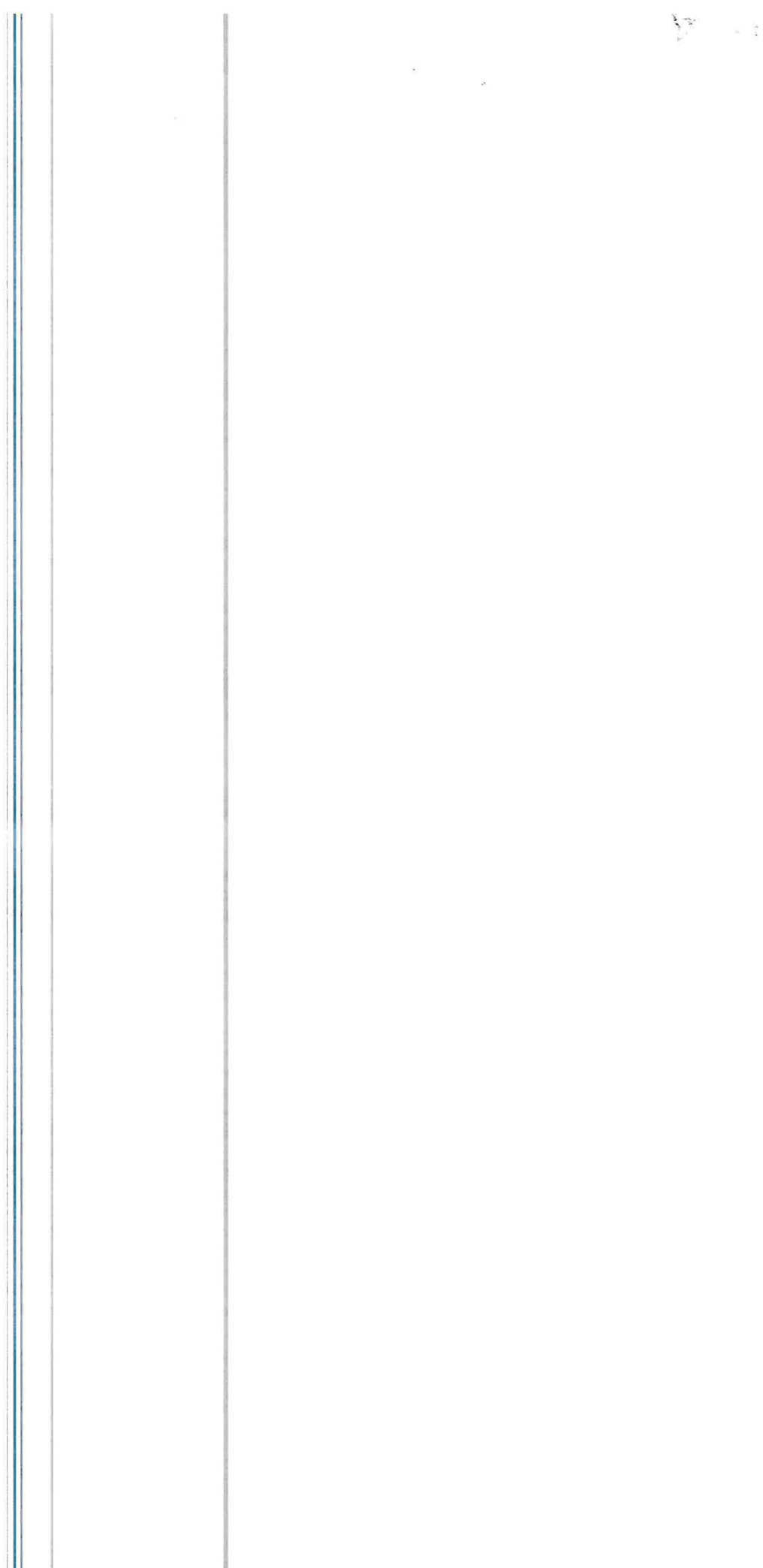
Sobre la aplicación de la norma que regula en el tiempo el artículo 68A del Código Penal de cara al permiso de 72 horas.

Con el fin de resolver el segundo problema jurídico, resulta de fundamental importancia la fecha de ocurrencia de los hechos - 7 de noviembre de 2014-, lo que indica que para ese momento estaba vigente la modificación introducida al artículo 68 A del Código Penal, por cuanto, la ley 1709 de 2014, comenzó a regir a partir del 20 de enero de 2014. La disposición en comento reza lo siguiente:

ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. MODIFICADO ARTÍCULO 32 LEY 1709 DEL 20 DE ENERO DE 2014.

No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal.





Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

3

**Parágrafo 1º.** Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código.

**Parágrafo 2º.** Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena.

Es pues que resulta imperioso para efectos de entrar a examinar el beneficio reclamado por el penado **GUSTAVO ADOLFO VELEZ ARANGO** establecer si en su contra registran antecedentes penales dentro de los 5 años anteriores a la fecha de los hechos de la presente actuación, cuestión que de la lectura del prontuario delictivo puede apreciarse la ausencia de aquellos, ya que solo le aparece registrada esta sentencia condenatoria.

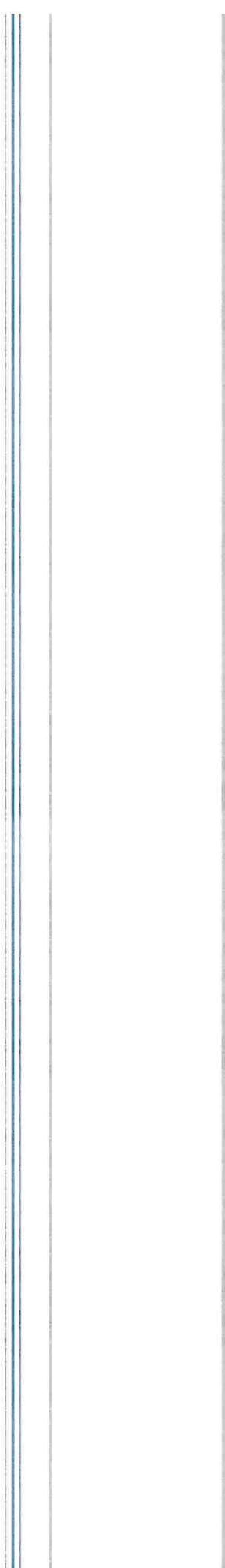
#### De la aplicación o no de lo señalado en el decreto 232 de 1998

Se sabe que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio ha sido partidario de una línea en donde considera como inconstitucional el Decreto 232 de 1998 en razón a que el Presidente de la República se había excedido en sus facultades cuando reglamentó el artículo 147 de la ley 65 de 1993. Así razonó aquella Corporación en la aludida decisión:

"3.3.1 La respuesta para el Tribunal, es que no existe en el fallo de constitucionalidad sobre el Decreto 232 de 1998, emitido por el Consejo de Estado, cosa juzgada absoluta, porque como se verá más adelante, resulta constitucionalmente inaplicable, al haberse excedido el gobierno la facultad reglamentaria, en actitud restrictiva para los condenados, estableciendo requisitos que la ley no consagra, o mejor, haciendo más gravosos los ya existentes para la obtención del permiso hasta de setenta y dos horas para salir del establecimiento sin vigilancia. Este aspecto en concreto, pese a haber sido fundamento de la demanda de nulidad, no fue considerado en el examen de constitucionalidad al decreto en comento.

Si bien el decreto en cuestión fue estudiado en Acción de Nulidad por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera, pronunciamiento del 27 de junio de 2002, radicado No. 110001-03-24-000-2000-6687-01 (6687), Consejero Ponente CAMILO ARCINIEGA ANDRADE, insistimos que no puede hablarse en tal decisión de una cosa juzgada absoluta como lo plantea el a quo, pues para la Corporación, estamos frente a una cosa juzgada aparente, porque en la decisión de constitucionalidad no se argumentó sobre el punto, y en tal caso, la decisión sobre esa norma pierde fuerza jurídica. "Es decir que en este caso es posible concluir que en realidad no existe cosa Juzgada y se permite una nueva demanda frente a la disposición anteriormente declarada exequible (...)

El Consejo de Estado habría de estudiar en la decisión en comento, la posible afrenta al preámbulo, los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 84 y 189-11 de la Constitución Política y 147 de la ley 65 de 1993, normas que a juicio de las actoras resultaban vulneradas con la expedición del decreto 232, pero resulta, que al examinar cada uno de los cinco (5) requisitos adicionales a los contenidos en el art. 147 de la ley 65, exigibles a los condenados por pena de prisión superior a 10 años, indicó frente al que aquí nos ocupa (numeral 4º), que haya trabajado, estudiado o enseñado durante todo el tiempo de reclusión) "que cuando el decreto 232 exige que el condenado haya trabajado, estudiado o enseñado todo el tiempo de reclusión, o hace más que reiterar lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 147 de la ley 65, que, de igual manera, exige que aquél haya trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión".





una exposición en torno a toda la Constitución, como tampoco, terminología utilizada en el decreto demandado, que haba de "todo el tiempo de reclusión." (resalta el Tribunal) que es en últimas donde radica la diferenciación con la norma original, la cual estipula: "durante la reclusión", es decir, que la ley 65 de 1993 no exige como lo hace el decreto revisado, que sea durante "todo" el tiempo, sino que la tantas veces citada ley 65, solamente refiere que haya trabajado durante el tiempo de reclusión sin señalamiento de unos límites temporales y mucho menos sin la exhaustividad que deduce la primera instancia, que tiene que ser todo el tiempo, o lo que es lo mismo, indefectiblemente e inexcusablemente, cada uno de los días en reclusión..." Finalmente concluyó la Sala:

"3.4 En ese orden de ideas, hay lugar y debe aplicarse en el sub examine, la excepción de inconstitucionalidad contenida en el Art. 4 Constitucional, en razón de que al expedirse el decreto 232 de 1998, el Presidente de la República excedió la potestad reglamentaria otorgada en el numeral 11 del Art. 189 ibídem, al reglamentar el Art. 147 de la mencionada ley 65, en el sentido de que, adicionó a la ley regulatoria, requisitos no contenidos en ésta, sin especificarse criterios de necesidad y haciendo más gravosa la situación para los internos."

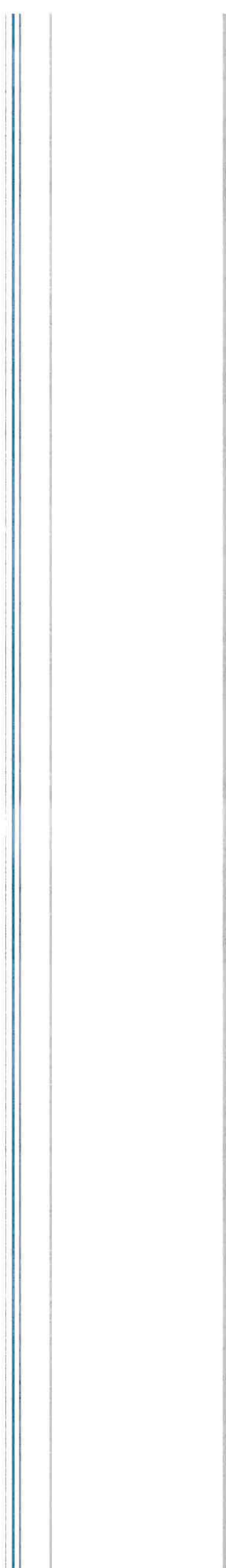
Si bien este criterio puede encontrar distanciamientos con pronunciamientos del Consejo de Estado, finalmente este Despacho no va a entrar en contravía con el superior funcional inmediato, pues sería inane entrar a enarbolar argumentos diversos cuando serían derrumbados con su actual postura, y por ello como se ha estado haciendo, al adoptarse decisiones relativas al reconocimiento del permiso de hasta 72 horas a favor de condenados a pena superior a diez (10) años de prisión, no se tendrán en cuenta los requisitos exigidos en el Decreto 232 de 1998, lo que conlleva a que finalmente quien pretenda ser beneficiado con el mencionado permiso debe acreditar tan solo el cumplimiento de los presupuestos de que trata el artículo 147 de la ley 65 de 1993.

**Del examen a los requisitos previstos para el permiso de 72 horas con la modificación del artículo 29 de la Ley 504 de 1999.**

En relación con el segundo problema jurídico, se torna como bacilar predicar que es competencia de los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, aprobar o improbar las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación de la libertad.

De otra parte el Consejo de Estado, sección primera Sala de lo contencioso Administrativo, estableció que los permisos Administrativos entrañan factores de modificación de las condiciones del cumplimiento de la condena y que como consecuencia de ello su reconocimiento cae bajo la competencia atribuida en el numeral quinto del artículo 79 del C.P.P., a los jueces de Ejecución de Penas, descrito anteriormente.

Consecuentemente la H. Corte Constitucional en sentencia C - 312/02 declara exequible el numeral 5 del artículo 79 de la ley 600 de 2000 y reitera su posición en la Tutela T 972 de 2005, "La inequívoca competencia asignada a los jueces de ejecución de penas en virtud del numeral 5 del artículo 79 de la ley 600 de 2000 para conceder beneficios Administrativos dejando a las autoridades administrativas únicamente la potestad de presentar propuestas o allegar las solicitudes de reconocimiento de





Como resultado de lo anterior transcrito se vislumbra a todas luces que es el Juez de Ejecución de Penas a quien le corresponde aprobar o no el permiso solicitado en esta oportunidad por **GUSTAVO ADOLFO VELEZ ARANGO**, conforme a la documentación allegada por el reclusorio que lo custodia.

Así las cosas y como quiera que el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario exige para el otorgamiento de este beneficio administrativo la satisfacción de los siguientes requisitos:

**1.- Estar en la fase de mediana seguridad:** La oficina jurídica del establecimiento penitenciario y carcelario de Acacias - Meta allega Acta Nro. 148-042-2019 del 31 de Julio de 2019 de la Dirección de Atención y Tratamiento, donde se emite el concepto del Consejo de Evaluación y Tratamiento, clasificando al interno en **FASE DE MEDIANA SEGURIDAD**, la que actualmente se encuentra vigente acorde a la cartilla biográfica expedida por el reclusorio que lo custodia. Se cumple así con este presupuesto.

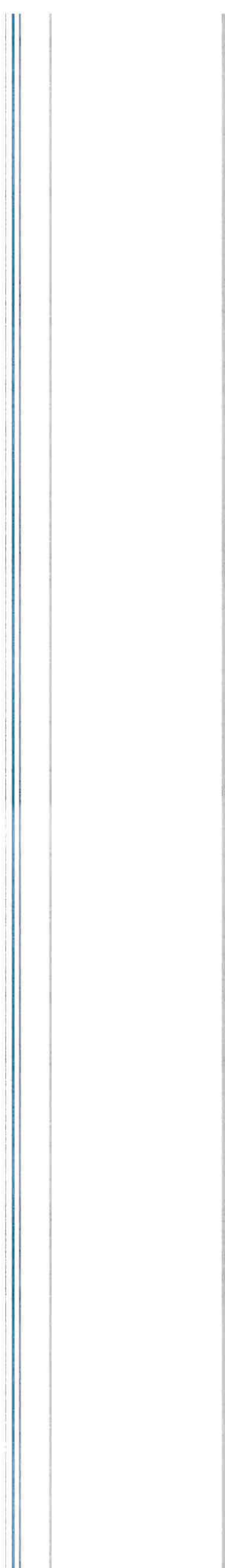
**2.- Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta, con excepción de aquellas personas que haya sido condenadas por delitos de conocimiento de Juzgados penal del Circuito Especializados, a quienes se les exige un descuento del 70% de la pena impuesta.** A la fecha sumando su detención física con las redenciones acumuladas y/o rebajas concedidas, este despacho declara que el condenado, lleva un total de descuento de pena de 72 meses y 27.5 días, superando así la tercera parte de la condena que es de 68 meses y 20 días.

ASUNTO	MESES	Y	DÍAS
DETENCIÓN FÍSICA	59		25.00
REDENCIÓN DE PENA	13		02.50
TOTAL	72		27.50

**3. No tener requerimientos de autoridad judicial:** La oficina jurídica del establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad allega el prontuario delictivo del interno donde no figura requerimiento por parte de autoridad judicial en contra de **GUSTAVO ADOLFO VELEZ ARANGO**, cumpliéndose así con este requisito.

**4.- No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el periodo del proceso, ni la ejecución de la sentencia condenatoria:** La Oficina de Investigaciones Internas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, Meta, certificó que en contra del penado no aparece registro de que haya sido sancionado disciplinariamente ni que se haya fugado.

**5.- Haber trabajado y Estudiado durante la reclusión observando buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina:** de acuerdo con las certificaciones acompañadas aparece que el penado ha realizado actividad válida para redimir pena y que la conducta se ha calificado en grado de buena y ejemplar, se da por cumplido este requisito.



6

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta los anteriores requisitos se aprueba el permiso administrativo solicitado por GUSTAVO ADOLFO VELEZ ARANGO, comunicándosele al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad, para que disponga de todo lo concerniente para su disfrute y a su cumplimiento, advirtiéndosele al condenado en mención, que debe observar buena conducta, puntualidad, so pena de suspendersele o revocársele este tipo de beneficio.

#### IV. OTRAS DETERMINACIONES

1. Copia de esta providencia déjese en la Asesoría Jurídica del centro de reclusión para que obre dentro de su cartilla biográfica, para que haga las anotaciones a que haya lugar e igualmente, entréguesele otra al de autos.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, Meta,

#### V. RESUELVE:

PRIMERO: REDIMIR a favor de GUSTAVO ADOLFO VELEZ ARANGO, pena de 1 mes 20 días.

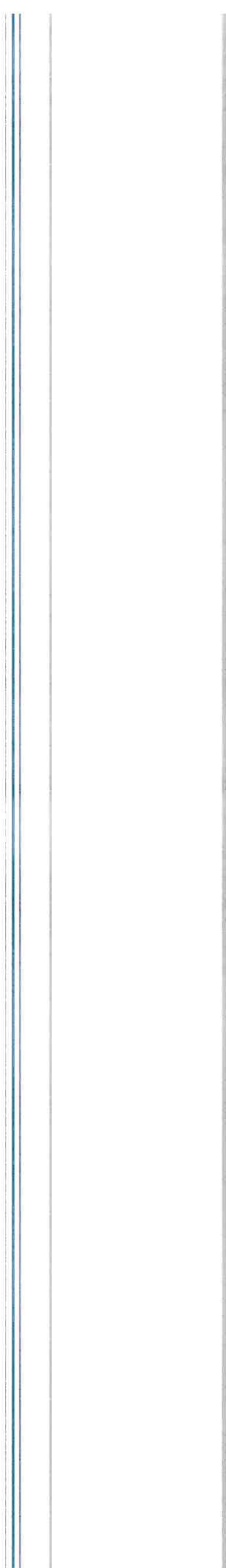
SEGUNDO: APROBAR el permiso de 72 horas a favor del penado GUSTAVO ADOLFO VELEZ ARANGO de acuerdo con lo señalado en precedencia.

TERCERO: DÉSELE cumplimiento al acápite de otras determinaciones.

CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de ley.

Notifíquese y cúmplase

AMPARO CUBILLOS LAVERDE  
Juez







Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE  
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE  
ACACÍAS - META**

Siete (7) de febrero de dos mil veinte (2020)

CUI: 05 001 60 00 206 2014 53567 00  
Número Interno: 2016 - 00308  
Sentenciado: GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO  
Delito: Homicidio agravado en concurso homogéneo  
Procedimiento: Ley 906 de 2004  
Autoridad: Circuito  
Actuación: De parte  
Interlocutorio No: 0228

**I. ASUNTO**

Se pronuncia el despacho, en relación con la revocatoria del permiso de 72 horas concedido al penado **GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO**, en virtud a que el privado de la libertad fue clasificado en fase de alta seguridad.

**II. ANTECEDENTES**

2.1 Por hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2014, el Juzgado 8° Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín Antioquia, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2015 lo condenó a la pena de **206 meses de prisión**, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena aflictiva, por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo, en calidad de cómplice. Se le negaron los subrogados penales.

2.2. En razón de este proceso ha estado privado de la libertad desde 12 de noviembre de 2014, esto es, **62 meses 26 días**.

2.3. Como redención de pena se ha reconocido en su favor **13 meses 2.5 días**.

**III. CONSIDERACIONES**

**PROBLEMA JURÍDICO**

Durante el desarrollo de esta decisión judicial será resuelto el siguiente interrogante: ¿Es procedente la revocatoria del permiso de 72 horas a quien ha sido clasificado en fase de alta seguridad?.

**SOLUCIÓN DEL CASO**

Este juzgado mediante interlocutorio número 2382 de fecha 7 de noviembre de 2019, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 147 de la ley 65 de 1993, concedió a **GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO**, el permiso de 72 horas.



Luego, la Directora de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacias, incluye Pabellón de Mujeres, mediante oficio 148-OAJUR-0351 del 29 de enero de 2020, el que ingreso al juzgado el 6 de febrero del corriente año, comunica que el penado ha sido clasificado por el Consejo de Evaluación y Tratamiento CET de ese reclusorio en **fase de alta seguridad** en acta número 148-001-2020 de fecha 23 de enero de 2020.

Como prueba la Directora de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacias, Meta, adjuntó a la respuesta copia del acta número 148-001-2020 de fecha 23 de enero de 2020 y oficio número 2373 A.T. del 29 de noviembre de 2019 suscrito por la Secretaría del Centro de Servicios Sistema Acusatorio Penal de Medellín, Antioquia.

Teniendo en cuenta la novedad reportada por la Directora de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacias, incluye Pabellón de Mujeres, relacionada con la clasificación en fase de alta de seguridad al condenado, resulta evidente que su situación frente al aludido permiso ha variado sustancialmente, por cuanto para este momento ya no concurre en su favor el requisito señalado en el numeral 1° del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario -ley 65 de 1993-, de **estar en fase de mediana seguridad**, lo que conlleva a que se deba revocar el reconocimiento del derecho a disfrutar del permiso de hasta 72 HORAS, como así se dispondrá en la parte resolutive de ésta decisión.

#### IV. OTRAS CONSIDERACIONES

- i- Entréguesele una copia de esta decisión al sentenciado.
- ii- Por el medio más expedito, envíese copia al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la localidad, para que repose en la hoja de vida del condenado.

Por lo expuesto, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, Meta,

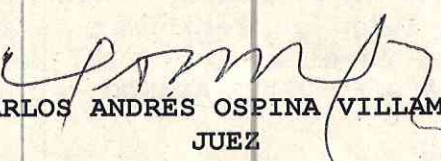
#### RESUELVE:

**PRIMERO: REVOCAR** el permiso de 72 horas que le fue concedido al penado **GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO**, por este juzgado en interlocutorio número 2382 de fecha 7 de noviembre de 2019, por lo señalado en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Dese cumplimiento al acápite de otras decisiones.

**TERCERO:** contra la presente determinación proceden los recursos de reposición y apelación.

#### NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

  
**CARLOS ANDRÉS OSPINA VILLAMIL**  
JUEZ

---

Carrera 20 número 13-42 teléfono (8) 6569027  
e-mail j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co





Doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CUI: 05 001 60 00 206 2014 53567 00 y 05 001 60 00  
000 2015 00496 00 -penas acumuladas-  
Número Interno: 2016 - 00308  
Sentenciado: GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO  
Delito: Homicidio agravado en concurso homogéneo  
Procedimiento: Ley 906 de 2004  
Autoridad: Circuito  
Actuación: De parte  
Interlocutorio No: 1657

### 1. VISTOS

Se pronuncia el Despacho frente a la solicitud de aprobación de permiso de 72 horas, deprecada por el señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO, recluso en el EPMSC de Acacías.

### 2. ANTECEDENTES

2.1 Por hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2014, el Juzgado 8° Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín Antioquia, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2015 lo condenó a la pena de 206 meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena aflictiva, por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo, en calidad de cómplice. Se le negaron los subrogados penales. 05 001 60 00 206 2014 53567 00.

2.2. Por hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2014, el Juzgado 45° Penal Municipal de conocimiento de Medellín, Antioquia, en sentencia de fecha 3 de noviembre de 2020, lo condenó a la pena de 124 meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena aflictiva, por el delito de hurto calificado agravado. Se le negaron los subrogados penales. 05 001 60 00 000 2015 00496 00.

Conoció en segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Antioquia, corporación judicial que, en decisión del 2 de agosto de 2021, confirma la sentencia de primera instancia.

2.3. Mediante Auto Interlocutorio N° 1970 de fecha 21 de diciembre de 2021, este Juzgado acumuló las penas antes descritas fijando el quantum en 292 meses 24 días de prisión.

2.4. En razón de este proceso ha estado privado de la libertad desde 12 de noviembre de 2014, esto es, 95 meses.

2.5. Como redención de pena se ha reconocido 23 meses 9.5 días.

### 3. CONSIDERACIONES

#### 3.1.- Problemas jurídicos

Corresponde al Juzgado determinar:

DGH. Carrera 20 número 13 - 42, teléfono (8) 6569027  
E mail. [j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co)



3.1.1 Si debe tenerse en cuenta las prohibiciones contempladas en las distintas modificaciones que ha tenido el artículo 68 A del Código Penal.

3.1.2 Si debe aprobarse el permiso de 72 horas solicitado por el condenado.

### 3.2.- SOLUCIÓN DEL CASO

#### Del permiso de 72 horas

Sobre la aplicación de la norma que regula en el tiempo el artículo 68A del Código Penal de cara al permiso de 72 horas.

(1) Con el fin de resolver el segundo problema jurídico, resulta de fundamental importancia la fecha de ocurrencia de los hechos - 8 de noviembre de 2014-, lo que indica que para ese momento estaba vigente la modificación introducida al artículo 68 A del Código Penal, por cuanto, la Ley 1709 de 2014, comenzó a regir a partir del 20 de enero de 2014. La disposición en comento reza lo siguiente:

**ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. MODIFICADO ARTÍCULO 32 LEY 1709 DEL 20 DE ENERO DE 2014.**

*No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*

*Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; **hurto calificado**; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles; falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal.*

*Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.*

**Parágrafo 1º.** *Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código.*

**Parágrafo 2º.** *Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena.*

(2) Resulta evidente que la disposición ya anotada prohíbe el otorgamiento del permiso de 72 horas a quienes hayan sido condenados por la conducta punible de **hurto calificado** y sin DGH.

Carrera 20 número 13 - 42, teléfono (8) 6569027

E mail. j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co

HECHOS OCURRIDOS FUERON EL MISMO DIA (8)-11-2014.



duda alguna, el peticionario fue condenado por ese reato, dentro del proceso con CUI No. 05 001 60 00 000 2015 00496 00.

Ahora bien, tampoco resulta aplicable la modificación introducida por el artículo 6 de la ley 1944 de 2018, al artículo 68 A del Código Penal, porque aquella disposición reprodujo la prohibición en relación con los condenados por el delito de hurto calificado, veamos:

*"Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales."*

Consecuente con lo anterior, no se aprueba el permiso de 72 horas deprecado por el condenado.

#### 4. OTRAS DETERMINACIONES

4.1. Entregar una copia de esta decisión al sentenciado.

4.2. Por el medio más expedito, enviar copia al centro de reclusión para que repose en la hoja de vida del condenado.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS META**

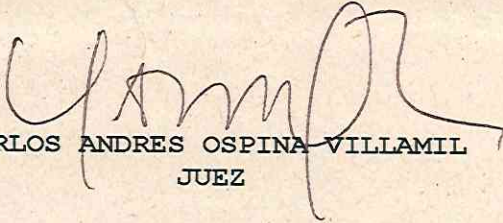
#### RESUELVE:

**PRIMERO:** NEGAR el permiso de 72 horas al señor **GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ARANGO**, conforme se señaló en precedencia.

**SEGUNDO:** Dese cumplimiento al acápite de otras decisiones.

**TERCERO:** Contra la presente decisión proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación.

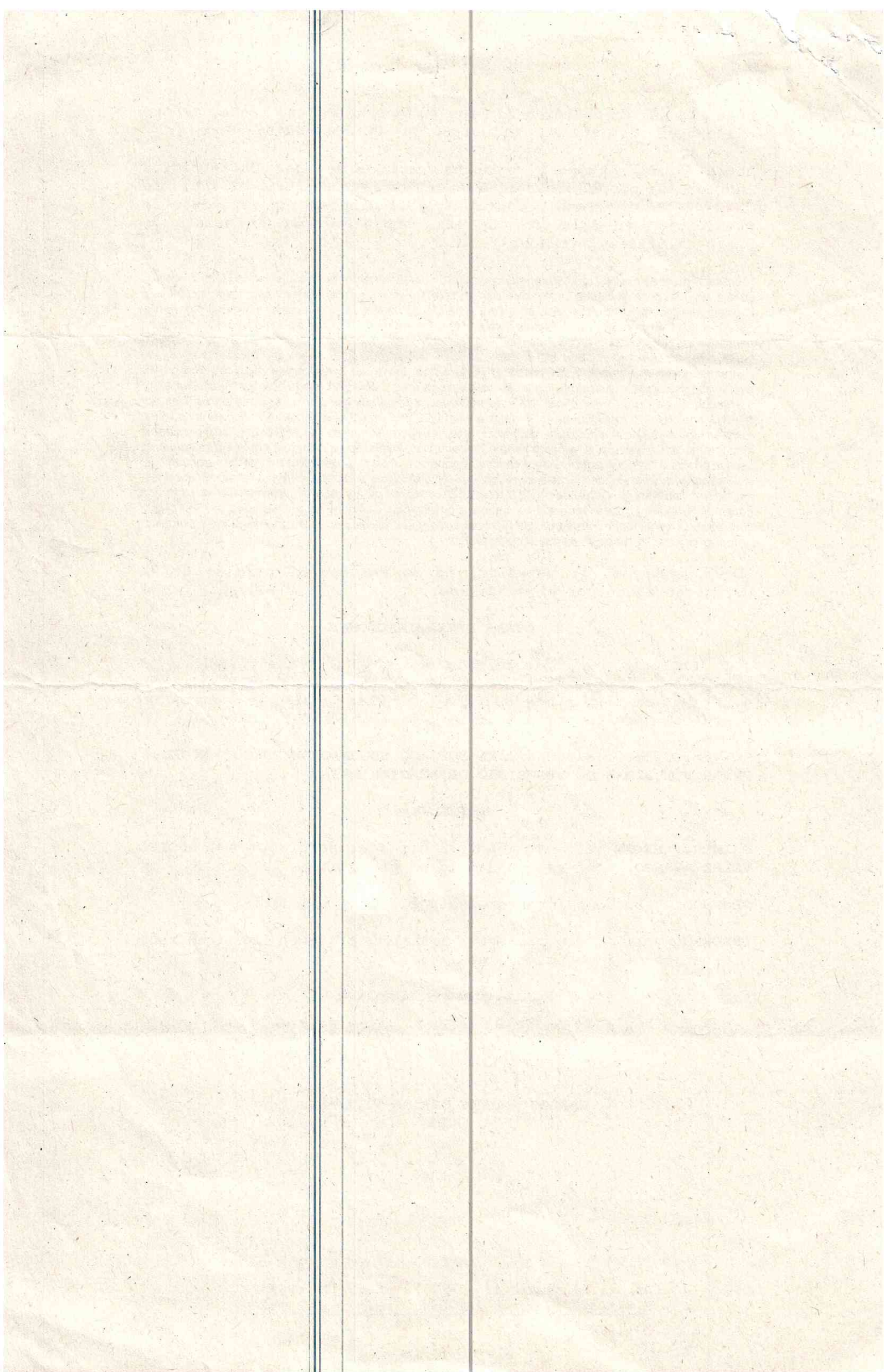
Notifíquese y cúmplase

  
CARLOS ANDRES OSPINA VILLAMIL  
JUEZ

DGH.

Carrera 20 número 13 - 42, teléfono (8) 6569027  
E mail: [j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co)





700



TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO  
SALA DE DECISION PENAL No. 4

Magistrado Ponente  
LUIS HERNANDO ROJAS ISAZA  
Aprobado Acta No. 001

Villavicencio (Meta) enero dieciséis de dos mil veintitrés

Radicación:	05001-60-00-2016-2014-53567-01
Procedencia:	Juzgado Segundo Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de Acacias
Autor:	Apelación auto negó permiso de hasta 72 horas.
Condenado:	Gustavo Adolfo Vélez Arango
Delito:	Homicidio agravado en concurso homogéneo
Decisión:	Confirma

I. ASUNTO A DECIDIR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el condenado Gustavo Adolfo Vélez Arango, contra el auto del 12 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, mediante el cual negó el permiso administrativo de hasta 72 horas.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

2.1- Gustavo Adolfo Vélez Arango, por hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2014, fue condenado el 25 de mayo de 2015 por el Juzgado Ostavo Penal del Circuito Especializado de Medellín<sup>1</sup>, a la pena principal de 206 meses de

<sup>1</sup> ACTIVO ONE DRIVE 65060000201655201, CARPETA PRIMERA INSTANCIA, ARCHIVO OFICIA LECTURA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

05001-60-00-2016-2014-53567-01  
Gustavo Adolfo Vélez Arango  
Apel. Auto negó permiso de hasta 72 horas  
Confirma

Radicado  
Confirma  
Apel. Auto  
Ponente

prisión, en calidad de cómplice del concurso homogéneo de dos homicidios, (Radicado 2014-053567).

De la misma manera, por hechos acaecidos el 8 de noviembre de 2014, fue condenado mediante sentencia del 3 de noviembre de 2020, por el Juzgado 45 Penal Municipal de Conocimiento de Medellín<sup>2</sup>, a la pena principal de 124 meses de prisión, en calidad de cómplice por los delitos de hurto calificado agravado. En segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la sentencia con providencia del 2 de agosto de 2021<sup>3</sup>. (Radicado 2015-00496)

Con auto del 21 de diciembre de 2021 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, acumuló jurídicamente las penas precitadas, fijando el quantum de 292 meses 24 días de prisión.

El condenado se encuentra privado de la libertad desde el 12 de noviembre de 2014<sup>4</sup>, cumpliendo a la fecha de proyección de la presente decisión (15 de diciembre de 2022) 97 meses, 3 días de prisión físicos y ha reprimido pena a su favor por 23 meses 9,5 días<sup>5</sup>.

Sumados los guarismos anteriores se tiene que, de la pena impuesta, el señor Vélez Arango ha cumplido 120 meses, 12,5 días.

2.2- Mediante auto del 12 de octubre de 2022<sup>6</sup>, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, Meta, negó el permiso administrativo de hasta 72 horas, al encontrarse la conducta por la que fue

<sup>2</sup> ARCHIVO OFICIA LECTURA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA, ARCHIVO OFICIA LECTURA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

<sup>3</sup> ARCHIVO ONE DRIVE 65060000201655201, CARPETA PRIMERA INSTANCIA, ARCHIVO OFICIA LECTURA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

<sup>4</sup> DE CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO POR EL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS, AUTO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022

<sup>5</sup> DE CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO POR EL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS, IN AUTO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022

<sup>6</sup> ARCHIVO OFICIA LECTURA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA, ARCHIVO OFICIA LECTURA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA





condenado (hurto calificado) excluida de dicho beneficio, conforme lo dispuesto en el artículo 68 A de la Ley 1709 de 2014.

2.3.- Contra la anterior decisión el señor Gustavo Adolfo Vélez Arango interpuso recurso de apelación<sup>7</sup>, exponiendo que fue condenado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo en calidad de cómplice y hurto calificado agravado, las cuales tuvieron ocurrencia el 8 de noviembre de 2014 a las 12:05 am, por lo que considera no se le puede aplicar lo consagrado en el artículo 68 A del Código Penal, debido a que ambos sucesos acaecieron el mismo día.

Expone que, los beneficios administrativos son esenciales en la fase de ejecución de la pena, pues pueden implicar reducción de tiempo de privación de la libertad, y están íntimamente ligados con el principio de resocialización, para lo cual, hace alusión a la sentencia C-312 de 2002, T-288 de 2015. Asimismo, señala que frente al tratamiento penitenciario la doctrina determina que la ejecución de la pena está orientada a la protección y reinserción social de reo, y el otorgamiento del sustituto de libertad condicional o concesión de beneficios puede operar al haber observado buena conducta, trabajar, no haber tenido intentos de fuga, ni cometido nuevos delitos durante la ejecución, por lo que sería «equitativo» negar beneficios por circunstancias de culpabilidad o personalidad que ha sido tenidas en cuenta en la condena.

2.4- El juez de primera instancia, mediante auto del 15 de noviembre de septiembre de 2022<sup>8</sup>, concede la apelación en efecto suspensivo, disponiéndose la remisión de las diligencias a esta Sala Penal.

<sup>7</sup> ARCHIVO CNE DRIVE 050100002014185701, CARPETA PRIMERA INSTANCIA, ARCHIVO OPERACIONAL C-3.  
<sup>8</sup> ARCHIVO CNE DRIVE 050100002014185701, CARPETA PRIMERA INSTANCIA, ARCHIVO DENOMINADO ALTO 23 DEL 15-11-2022 ( ).

III - CONSIDERACIONES

3.1- Competencia.

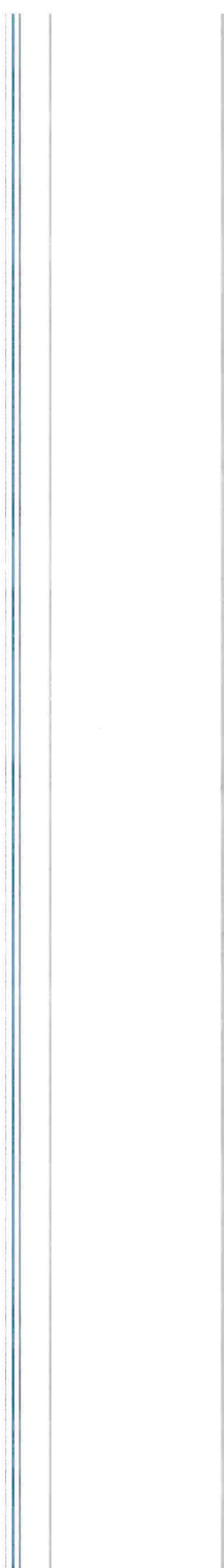
De conformidad con el numeral 6º del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, este cuerpo colegiado es competente para resolver la apelación promovida contra el auto objeto de alzada.

3.2.- Según los planteamientos del recurrente el problema jurídico que debe desatar el Tribunal se contrae a determinar si, contrario a lo sostenido por el *a quo*, Gustavo Adolfo Vélez Arango se hace acreedor al beneficio administrativo de 72 horas, pese a encontrarse el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por el cual fue condenado, excluido expresamente por el artículo 68 A del Código Penal modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014.

3.3.- De entrada, se advierte que Gustavo Adolfo Vélez Arango no puede hacerse acreedor al beneficio solicitado por la expresa prohibición establecida en el citado artículo 68 A del Código Penal modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, ya que el mismo se encuentra vigente desde el 20 de enero del mismo año, y establece lo siguiente:

*«No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutivo de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, sobre los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*

*Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública debiles contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que tengan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dinero; utilización indebida de información privilegiada; cohecho para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones*





personales con defraudar censales con elemento corruptivo, violación ilícita de comunicaciones, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, trata de personas, apogeo al genocidio, lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, testifera, enriquecimiento ilícito de particulares, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; usurpación; instigación a delinquir; cuplo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de rindere; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al cuplo; producción y transferencia de niños antipersonal.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los artículos 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 506 de 2004.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 386 del presente Código.

PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicadores de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena.»

Lo anterior, pues el señor Gustavo Adolfo Vélez Arango fue condenado entre otras por la conducta pumbe de hurto calificado, por hechos que datan del 8 de noviembre de 2014, cuando estaba vigente el artículo 68 A del Código Penal modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, que reguló la exclusión de beneficios y subrogados.

En razón de lo anterior, al haber sido condenado, entre otros, por el delito de hurto calificado por hechos cometidos el 8 de noviembre de 2014, cuando la norma ya estaba vigente, el señor Gustavo Adolfo Vélez Arango no puede

hacerse acreedor a dicho beneficio, sin que sea necesario entrar a verificar el cumplimiento de cada uno de los presupuestos previstos en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993.

Por consiguiente, acortó el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, al despachar de manera desfavorable el beneficio solicitado por expresa prohibición legal, pues esta no es contraria a los mandatos constitucionales y legales, por el contrario, lo resuelto se aviene a la normatividad, que por demás resulta de una constatación muy objetiva.

Valga aclarar, que el condenado expone en su alzada que no es posible efectuar una valoración de su conducta, sin embargo, ello no es un presupuesto para el otorgamiento del beneficio administrativo de 72 horas, ni fue objeto de análisis por parte del *a quo*. Frente a sus demás planteamientos relacionados con la importancia del otorgamiento de dichos beneficios para el proceso de resocialización, lo cierto es que hay una prohibición de carácter legal.

#### IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida el 12 de octubre de 2022, por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias – Meta, a través de la cual se negó el beneficio administrativo permiso de hasta 72 horas.



06/01/2016 20:24:03 35701  
Código: Aduo Viter Arango  
Asunto: Aduo Viter Arango de los 22 Jueces  
Decisión: Códigos

SEGUNDO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cumplase y devuélvase

  
LUIS HERNÁNDEZ ROJAS ISAZA  
Magistrado

  
ALCIBIADES VARGAS BAUTISTA  
Magistrado

  
DIEGO ALVARADO ORTIZ  
Magistrado



~~8222~~

3156948200

from Police